

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	VERBAL
DEMANDANTES	ANDREA HERNÁNDEZ YEPES Y FELIPE MEJÍA CORREA
DEMANDADOS	LISDEI JOHANNA OCHOA TAPIAS Y LAURA MARÍA MORALES BLANCO
INSTANCIA	SEGUNDA -APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO DÉCIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 010 2023 00018 01
PROVIDENCIA	INTERNO 2023-040
TEMAS	AUTO INTERLOCUTORIO N° 070
DECISIÓN	EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. INADMISIÓN Y RECHAZO. JURAMENTO ESTIMATORIO
MAGISTRADA PONENTE	CONFIRMA MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente al auto proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín el día 13 de febrero de 2023 (Archivo digital 05. Primera Instancia), mediante el cual dispuso el rechazo de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderada judicial, los señores Felipe Mejía Correa y Andrea Hernández Yepes promovieron demanda en contra de las señoras Lisdei Johanna Ochoa Tapias y Laura María Morales Blanco, en la que como pretensiones principales se formularon las siguientes: declarar que las demandadas Lisdei Johanna Ochoa Tapias y Laura María Morales Blanco incumplieron el contrato de promesa de compraventa del lote 22, dentro proyecto inmobiliario Monteverde Campestre ubicado en el Municipio de San Pedro de los Milagros - Antioquia, celebrado con las aquí demandantes el día 13 de agosto de 2021; ordenar a las demandadas que procedan con la entrega total del proyecto como se pactó en la promesa de compraventa y, posteriormente a la solemnización de las escrituras públicas de compraventa y la entrega material del bien inmueble; se ordene a las demandadas a pagar

el diez por ciento (10%) del precio de la venta, como cláusula penal a favor de los demandantes, como resarcimiento de los perjuicios tasados en las promesas, por ser la parte que no ha cumplido con el contrato de conformidad con lo pactado, valor equivalente a \$13.400.000.

Subsidiariamente se plantearon las siguientes pretensiones: declarar la resolución del contrato de promesa de compraventa suscrito entre los señores Andrea Hernández Yepes y Felipe Mejía Correa y, las señoras Lisdei Johanna Ochoa Tapias y Laura María Morales Blanco de fecha 13 de agosto de 2021; que las demandadas devuelvan a los demandantes las sumas de dinero que le entregaron, equivalentes a la suma de sesenta y siete millones de pesos (\$67.000.000) debidamente indexadas, tal y como fue pactado en la promesa de compraventa, así, cláusula penal del 10% sobre el valor del contrato de promesa de compraventa suscrito el 13 de agosto de 2021, equivalente a trece millones cuatrocientos mil pesos \$13.400.000; además, condenar a las demandadas a pagar a los demandantes, los valores aquí descritos, **“los cuales se declaran bajo juramento estimatorio, de acuerdo a lo ordenado por el Artículo 206 del Código General del Proceso (LEY 1564 DE 2012)”** La tasación razonable es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Pago del 50% de la compraventa	(\$67.000.000.00)
Clausula penal	(\$13.400.000.00)
- Un contrato con una empresa constructora, para iniciar la construcción de la vivienda para el mes de agosto de 2022, con la firma Inversiones JL Urrutia S.A.S por valor de Trescientos Nueve Millones Seiscientos Mil Pesos (\$309.600.000)	(\$30.960.000.00)Clausula penal por incumplimiento.
- un contrato con la firma (Mejia Parra Arquitectos) por valor de Treinta y Seis Millones Setecientos Mil Pesos (\$36.700.000.00).	(\$3.670.000.00)Clausula penal por incumplimiento.
Compra de Materiales para la Construcción del inmueble por más de Ciento Veintisiete Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos (\$127.438.880.00).	(\$127.438.880.00). MATERIALES
Total de la pretensión	242.468.880

(Archivo digital 02. Primera Instancia).

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, despacho que por medio de auto de 27 de enero del año en curso dispuso su inadmisión (Archivo digital 03. Primera Instancia), exigiendo, entre otros requisitos, que para efectos de la cuantía deberá formularse el juramento estimatorio referido a los perjuicios reclamados, y para que se indique la procedencia de las sumas correspondientes a cláusulas penales de los

contratos de construcción y de diseño arquitectónico, pues si bien se aportaron un contrato y una cotización ilegible, no se ve la relación de esas pruebas con las sumas pedidas.

Dentro del término concedido para la subsanación, la apoderada de la parte demandante pretendiendo dar cumplimiento a las exigencias realizadas por el despacho, remitió a través de correo electrónico, una serie de documentos sin detallar a qué hace referencia cada uno. (Archivo digital 04. Primera Instancia),

En providencia del día 13 de febrero de 2023 (Archivo digital 05. Primera Instancia), el juzgado de primera instancia decidió rechazar la demandada porque consideró que la parte demandante no cumplió con todas las exigencias que se le hicieron en el auto inadmisorio; como fundamento de su decisión expuso que, frente al juramento estimatorio de los perjuicios reclamados y la procedencia de las sumas reclamadas en las pretensiones, no allegó memorial alguno precisando tales rubros, además, para justificar lo pedido, aportó una serie de cuadros de valores inconexos, que no brindan claridad de ninguna naturaleza, afirmando el juzgado que en lugar de hacerse claridad, se creó una confusión mayor, y las sumas pedidas inicialmente no coincidieron con las solicitadas en el memorial de subsanación, por lo que ante la falta de claridad en lo pedido, a la luz de los artículos 82 y 90 del C.G.P. rechazó la demanda.

II. LA IMPUGNACIÓN.

Frente al anterior proveído la parte demandante a través de su apoderada judicial, formuló recurso de apelación argumentando que, frente a lo solicitado por el juzgado en auto de 27 de enero de 2023, donde solicita subsanar, aportó constancia de cumplimiento frente a lo solicitado en el numeral primero, aportó certificado de los datos actualizados en el Registro Nacional de Abogados, en el que se incluye el correo electrónico; segundo, aportó constancia de haber enviado copia de la demanda a la parte actora.

No obstante, frente al tercero, para efectos de la cuantía, como lo requirió el juzgado, sobre el juramento estimatorio referido a los perjuicios reclamados, se cumplió desde la presentación de la demanda como consta en el folio 15

dentro del acápite de pretensiones; con respecto al cuarto punto, la procedencia de las sumas correspondientes a las cláusulas penales de los contratos de construcción y de diseño arquitectónico, tal como se desprende de los contratos aportados con la demanda inicial, son los valores relacionados en las pretensiones, que corresponden a las sumas de dinero que los demandantes tendrán que asumir como cláusula penal por incumplimiento del contrato celebrado con ambos, que equivalen al diez por ciento (10%) del valor de los contratos, toda vez que a la fecha no se han podido ejecutar por el incumplimiento del contrato de compraventa y la entrega material del lote, remitiéndose al cuadro que para claridad de la providencia se inserta:

CONCEPTO	VALOR
Pago del 50% de la compraventa	(\$67.000.000.00)
Cláusula penal	(\$13.400.000.00)
- Un contrato con una empresa constructora, para iniciar la construcción de la vivienda para el mes de agosto de 2022, con la firma Inversiones J.L Urrutia S.A.S por valor de Trescientos Nueve Millones Seiscientos Mil Pesos (\$309.600.000)	(\$30.960.000.00)Cláusula penal por incumplimiento.
- un contrato con la firma (Mejía Parra Arquitectos) por valor de Treinta y Seis Millones Setecientos Mil Pesos (\$36.700.000.00).	(\$3.670.000.00)Cláusula penal por incumplimiento.
Compra de Materiales para la Construcción del inmueble por más de Ciento Veintisiete Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos (\$127.438.880.00).	(\$127.438.880.00). MATERIALES
Total de la pretensión	242.468.880

A continuación, se inserta pantallazo de la cláusula del contrato de construcción con la firma Inversiones J.L Urrutia S.A.S cuyo representante legal es el constructor Jorge Luis Urrutia Lozano:

CLAUSULA NUEVE — MULTAS - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la parte CONTRATISTA, facultará al CONTRATANTE y a la INTERVENTORIA para imponer y cobrar de pleno derecho multas del uno por ciento (1%) del valor inicial del contrato por cada día calendario de incumplimiento a las fechas parciales o totales, sin que ellas excedan el veinte por ciento (20%) del valor total final del Contrato. El valor de las multas será descontado directamente de cualquier saldo por pagar a favor de la parte CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la(s) garantía(s) constituida(s), a opción de la parte CONTRATANTE. Si ello no fuere posible, se cobrará ejecutivamente sin perjuicio de la competencia del Arbitramento previsto en este documento, sin que haya lugar a reclamación o reconvencción alguna, pues laparte CONTRATISTA expresamente renuncia a ellas. PARAGRAFO PRIMERO: Las Partes declaran y aceptan que la aplicación de multas no excluye la posibilidad de medidas, sanciones e

Y sobre el contrato de diseño para la casa con la firma de Arquitectos Mejía Parra indica que, se está cobrando una multa del diez por ciento (10 %) del valor del contrato, toda vez que el diseño no sirve para otro lote que no sea el prometido en el contrato de compraventa, esta es la razón de la cuantía, la cual equivale a \$3.670.000 por incumplimiento del contrato:

PROPUESTA DE REDES E ILUMINACIÓN	
y de iluminación interior y exterior	
Construcción tridimensional / digital	
Renderings que representen el proyecto	
Memorias de cálculo del diseño	
Listado de materiales y especificaciones	
TOTAL	
36.700.000	
TERMINOS DE PAGO / plazos de entrega	
50% anticipo / 1 mes para la primera entrega	
50% saldo / 1 mes para la segunda entrega con correcciones	
ENTREGA FINAL	
Tiempo total diseño: 2 meses	

Aclara que los documentos anexos al memorial de subsanación son para una mayor comprensión de las pretensiones, que en ningún momento modifican o adicionan la demanda inicial (Archivo digital 06. Primera Instancia).

El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, concedió el recurso de apelación que interpuso la parte actora frente al auto de 13 de febrero de 2023 que rechazó la demanda por no cumplir con la totalidad de requisitos señalados en la inadmisión (Archivo digital 07. Primera Instancia).

III. CONSIDERACIONES

1. DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

A fin de garantizar la concurrencia de los presupuestos procesales y así evitar sentencias inhibitorias y nulidades que afecten la validez del trámite, tiene diseñado el estatuto procesal civil una actuación determinante, misma que refiere al estudio de admisibilidad de la demanda y funge como el primer control de legalidad del ruego de tutela judicial. Para el Juez dicha actuación comporta el ejercicio de un deber-poder que puede dar lugar a la admisión de la causa, a su inadmisión o a su rechazo.

Tanto la inadmisión como el rechazo tienen en común la no aceptación inicial de la demanda; no obstante, ambas figuras difieren ostensiblemente en sus efectos dado que la primera comporta el aplazamiento de la aprobación de

libelo genitor, previa concesión de oportunidad para la subsanación de ciertos defectos; mientras que el rechazo supone el *definitivo* desprendimiento de la causa por parte de la autoridad judicial destinataria. Por supuesto que el rechazo puede estar precedido de la inadmisión de la demanda.

Sobre la materia que se viene destacando prevé el artículo 90 del Código General del Proceso:

Admisión, Inadmisión y Rechazo de la Demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.

4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.

6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.

7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.

Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano.

En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo

121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda.

Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para efectos de la calificación de desempeño del juez. Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una relación de las demandas rechazadas, para su respectiva compensación en el reparto siguiente.

Parágrafo Primero. La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva.

Parágrafo Segundo. Cuando se trate de la causa prevista por el numeral 4 el juez lo remitirá al defensor de incapaces, para que le brinden la asesoría; si esta entidad comprueba que la persona no está en condiciones de sufragar un abogado, le nombrará uno de oficio. (Negrillas fuera del texto original)

Importa igualmente destacar que, con los mismos fines de saneamiento y eficacia del proceso, el referido Estatuto Procesal contempla en su artículo 82 el contenido de toda demanda, enunciando en 11 numerales los requisitos mínimos de forma que debe contener la misma, para que permita el impulso del proceso que conlleve luego a la posibilidad de proferir una decisión que estudie el fondo del asunto en la demanda contenido, el mencionado artículo es del siguiente tenor literal:

Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
- 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.**
- 5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.**
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.
- 7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.**
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.
11. Los demás que exija la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos. (Negritas fuera del texto original)

2. CASO CONCRETO.

En el presente caso, como se detalló en la parte expositiva, acontece que de los diferentes requisitos exigidos para la admisión de la demanda se encontraron irregularidades que dieron lugar a la inadmisión de la misma, de los cuales sólo fueron echados de menos finalmente, los relacionadas con el juramento estimatorio referido a los perjuicios reclamados y, las sumas correspondientes a las cláusulas penales de los contratos de construcción y de diseño arquitectónico, que, según concluyó el A Quo, no fueron subsanados adecuadamente, procediendo entonces al rechazo de la demanda, al considerar que no están determinadas de una manera precisa y clara las pretensiones de condena.

Respecto de los requisitos pedidos en los numerales tercero y cuarto del auto que inadmitió la demanda y que en dicha providencia se indicaron como que la parte demandante debía conforme a los arts. 90 y 206 del C.G.P. y para efectos de la cuantía formular el juramento estimatorio referido a los perjuicios reclamados e indicar la procedencia de las sumas correspondientes a las cláusulas penales de contratos de construcción y diseño arquitectónico, advierte esta Magistratura que se hace necesario pronunciarse de manera conjunta respecto de los dos requisitos que no se subsanaron con claridad, exigidos por el juzgado, los cuales, al no ser cumplidos por la parte recurrente, desembocaron en el rechazo de la demanda.

En un primer momento, la parte demandante allega al juzgado de primera instancia una serie de documentos con los que pretende subsanar las exigencias que se le hicieron en el auto inadmisorio, sin embargo, no detalla a qué hace referencia cada uno; contrario al recurso de apelación, en el cual intenta precisar que desde el momento de la presentación de la demanda

cumple con los requisitos exigidos, pero limitándose a remitir al juez a lo expresado en el libelo genitor.

Nótese que la parte actora desde la redacción de las pretensiones no relacionó las sumas de dinero que se solicitan por concepto de cláusulas penales derivadas de los contratos de construcción, diseño arquitectónico y facturas por concepto de compras de materiales de manera clara, ni detalló los perjuicios concretos respecto de los cuales se pide la emisión de condena a cargo de los demandados, requisito exigido por el numeral 4º del artículo 82 del Código General del Proceso, citado en precedencia.

Si bien, arrió una serie de documentos con los cuales pretendió subsanar los requisitos exigidos por el juzgado de primera instancia, no fue clara la demanda ni la subsanación en detallar, ni siquiera en los cuadros en los que presenta una relación de valores a qué corresponde cada uno de los conceptos que pide, ni la relación de estos valores allí detallados con los anexos aportados, creando mayor confusión, la cual no logra superarse al remitirse a la lectura del fundamento fáctico de la demanda, toda vez que, no soporta o no se crea relación específica con los perjuicios que se pretende sean reconocidos a favor de la parte actora (numeral 5º del artículo 82 ibídem).

Para mayor claridad de la situación ocurrida en el presente asunto, resulta pertinente citar al Doctrinante Hernando Devis Echandía, el cual sirve para reiterar lo explicado hasta ahora, así:

Para la admisión de la demanda se requiere que no haya duda acerca de las declaraciones que se solicitan o de la condena que se pide contra el demandado o del efecto constitutivo que se persigue, si se trata de juicio de conocimiento; y de la clase y monto de la orden de pago que se busca, si de juicio ejecutivo, o del monto de la deuda y la petición de venta, si es un juicio de venta de cosa hipotecada o dada en prenda, etc. En una palabra: **se requiere que aparezca clara la pretensión, y el objeto de la demanda.**

En ocasiones, la causa de la obligación objeto de la demanda es inseparable de ella y constituye parte de la determinación de lo que se pide, como sucede, por lo general, en las acciones de condena para el pago de sumas de dinero, especies y perjuicios, **pues no será suficiente decir cuánto y de qué clase debe ser la condena, para que aparezca en forma clara el objeto de la demanda, sino que es indispensable, además, determinar la causa o hecho jurídico de**

donde se hace derivar esa petición para que el demandado sepa en qué consiste el litigio que se plantea, a saber: un cierto contrato mutuo, un precio pendiente de un contrato de venta, una lesión sufrida por determinado acto culposo o doloso, etc. Sin esta precisión, faltaría al cuarto requisito apuntado (...)¹ (Negrillas fuera del texto original)

De manera que imposible resulta entender lo pedido con los conceptos así formulados, y es por ello que, este Tribunal considera acertadas las afirmaciones del juzgado de primera instancia, referentes a que en el libelo introductor no fueron determinadas con precisión y claridad las pretensiones.

Ahora bien, con respecto al juramento estimatorio, tampoco le asiste razón a la parte recurrente ya que, el artículo 206 del Código General del Proceso, es claro en señalar que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización deberá estimar razonadamente la cifra que pretende recibir, lo que no significa algo distinto a que esta cifra debe estar precisada y basada en razones, argumentos, fundamentos o justificaciones, verificables o comprobables, exigencia que no se satisface con la generalidad aquí plasmada, sino que exige que el juramento se lleve a cabo **discriminando cada uno de sus conceptos**, condicionamiento éste determinante para conocer y valorar el origen, alcance y contenido de la estimación, principalmente en los casos como el presente donde lo reclamado está integrado por numerosos conceptos.

Acorde con la anterior inteligencia es que la norma exige de la contraparte que la objeción **“especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación”**; exigencia ésta de imposible satisfacción si la parte que realiza el juramento no atiende los criterios analizados en precedencia.

La doctrina nacional que con más agudeza ha analizado el instituto jurídico procesal que nos ocupa ha sostenido:

En síntesis, el texto de la norma exige que la estimación sea **“razonada”**, y que haya discriminación **“de cada uno”** de los conceptos.

De otro lado, el numeral 7° del artículo 82 del CGP establece que salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo

¹ DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá 2009. Pág. 565-566

proceso deberá contener “7. *El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*” Por lo tanto, la demanda debe inadmitirse si no se hace el juramento estimatorio o si este es precario o insuficiente, esto es, cuando el juramento no ofrece la relación discriminada de los distintos rubros que configuran la reclamación. De este modo, si el juramento estimatorio no está debidamente razonado, o si no hay discriminación en detalle de cada uno de los factores constitutivos de los perjuicios reclamados, de las mejoras o de otras fuentes de indemnización, el juez deberá exigir al demandado que haga la relación especificada y detallada de los valores pretendidos. En verdad la seriedad y consistencia del juramento estimatorio facilitará la gestión del proceso en muchos aspectos, pues esa descripción detallada auspicia en primer lugar que el demandado adopte una posición ante la reclamación. (...) En buena medida, el nivel de detalle del juramento estimatorio permite un mejor ejercicio del derecho de defensa, pues no es fácil para el demandado oponerse a un juramento en el cual se invoca una cifra genérica, sin el detalle necesario y sin conocer los distintos elementos integrantes de la pretensión indemnizatoria, que podrían conducirlo a una conducta de no objeción.²

Valga acotar lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C 157 de 2013 respecto de dicha institución:

Señalar la cuantía, por la vía del juramento estimatorio, cuando sea necesario, o por la vía de su estimación razonada, es uno de los requisitos de la demanda, al tenor de lo previsto en el artículo 82[9], numerales 7 y 9. Este requisito no es un mero formalismo, pues guarda relación con un medio de prueba y, en todo caso, es necesario para determinar la competencia o el trámite. Por lo tanto, señalar la cuantía no es un requisito prescindible o caprichoso, sino un presupuesto necesario para el trámite del proceso.

Si en la demanda o en su contestación, la parte o su apoderado, o ambos, suministran información que no corresponda a la verdad, en el artículo 86 se prevé que habrá lugar a remitir las copias pertinentes para los procesos penales y disciplinarios, a imponer una multa y a condenar a una indemnización de perjuicios. Así, la falta de rigor con la veracidad de la información aportada, genera consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales.

(...)

Por razones de probidad y de buena fe se exige, por ejemplo, que el demandante obre con sensatez y rigor al momento de hacer su reclamo a la justicia, en especial en cuanto atañe a la existencia y a la cuantía de los perjuicios sufridos. Como se ilustró atrás, no se trata de un mero requisito formal para admitir la demanda, sino que se trata de un verdadero deber, cuyo incumplimiento puede comprometer la responsabilidad de la parte y de su apoderado.

² VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. El Juramento Estimatorio en el Código General del Proceso. En: XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal (Cartagena – Colombia, 10, 11 y 12 de Septiembre de 2014). Bogotá: Universidad Libre – ICDP, 2014. Páginas 127 a 147.

Por las mismas razones se permite que la parte estime de manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y se reconoce a esta estimación como un medio de prueba que, de no ser objetada, también de manera razonada, o de no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena. Esto quiere decir que basta con la palabra de una persona, dada bajo juramento, para poder tener por probada tanto la existencia de un daño como su cuantía.

Acorde con lo expuesto en precedencia, el juramento estimatorio constituye un medio de prueba frente a los conceptos reclamados por el demandante, el cual conforme al principio procesal de contradicción, debe ser conocido por la otra parte, para que en el caso de no estar de acuerdo con él, ésta puede aportar las pruebas que considere necesarias para desvirtuarlo; mal haría el juez en no exigir en el presente caso la presentación de dicho medio prueba respecto de los valores procedentes de las pretensiones, específicamente de los contratos de construcción y diseño arquitectónico, cuando el mismo artículo 82 en su numeral séptimo, lo exige como un requisito de la demanda.

Por lo anterior, se concluye que no resultan admisibles los argumentos planteados por la parte recurrente, esto es, su insistencia en que el juramento estimatorio se cumplió desde la presentación de la demanda dentro del acápite de pretensiones, porque luego de la lectura de dicha norma, se desprende con facilidad que debe ser sustentado discriminando cada uno de sus conceptos.

En suma, lo estudiado hasta ahora es suficiente para concluir que, el escrito genitor no cumple a cabalidad con los requisitos formales exigidos por el actual estatuto procedimental colombiano, tal y como así lo entendió el juzgado de primer grado.

De manera que, asistiéndole razón al Juez *A Quo* en unas de las exigencias efectuadas en el auto inadmisorio de la demanda, detalladas en esta providencia y, las cuales estuvieron encaminadas a obtener una demanda en forma que permita el curso del proceso para llegar a la definición del asunto con un fallo de mérito y, ante el incumplimiento de las mismas, procedía el rechazo de la causa, como en efecto se decidió en la providencia recurrida,

la que será confirmada en esta instancia.

3. COLOFÓN Y COSTAS.

Como en definitiva no se cumplieron los requisitos exigidos en el auto inadmisorio de la causa, procedía el rechazo de la presente demanda, y por ende la **CONFIRMACIÓN** en esta instancia del auto apelado.

No obstante, la resolución de la instancia ser negativa para la parte recurrente, no habrá lugar a imponer condena en costas, toda vez que no se causaron. Lo anterior atendiendo la regla 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 13 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se dispuso el rechazo de la demanda de la referencia, por las razones expuestas.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica de conformidad con el artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:
Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3a3fddc6d8ae94daabf935d80d5fd9ef2218f618f5c5e9757152f2b23bf0e5c5**

Documento generado en 10/05/2023 04:43:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>